



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-015-017-2023-00006-01
Demandante:	Yolanda Inés Correa Zapata
Demandado:	Colpensiones E.I.C.E.
Asunto:	Apelación y Consulta de Sentencia
Procedencia:	Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín
M. Ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de vejez - Régimen de transición - Sumatoria de tiempos públicos y privados - Liquidación mesada pensional

Medellín, abril veinticinco (25) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha anotada, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE como magistrada ponente, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad pública demandada, respecto de la sentencia proferida el 09 de marzo de 2023 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ordinario laboral instaurado por Yolanda Inés Correa Zapata contra Colpensiones E.I.C.E., conocido con el Radicado Único Nacional 05001-31-015-017-2023-00006-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora Yolanda Inés Correa Zapata convocó a juicio a Colpensiones E.I.C.E., pretendiendo se declare que le asiste el derecho al reajuste de la pensión de vejez, con base en el IBL de toda la vida laboral y una tasa de reemplazo del 90%; en consecuencia, procura el reconocimiento y pago del mayor valor causado desde el 28 de octubre de 2001 por concepto de reajuste pensional, con los intereses de mora, o en subsidio, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

En respaldo de tales pedimentos, la señora Yolanda Inés Correa Zapata expuso que nació el 28 de octubre de 1946, y que fue pensionada por vejez, mediante la Resolución 2219 del 11 de marzo de 2003, en aplicación del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición, a partir del 28 de octubre de 2001, con una mesada de \$1.644.096, liquidada sobre 1.024 semanas cotizadas, un IBL de \$2.192.128 y una tasa de reemplazo del 75%.

Informó que laboró al servicio del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de forma interrumpida, entre 23 de febrero de 1971 y el 20 de diciembre de 1979, sin cotizaciones al ISS, que el 12 de octubre de 2021 solicitó el reajuste de la pensión con una tasa de reemplazo del 90%, y que a través de la Resolución SUB 169398 del 28 de junio de 2022 Colpensiones E.I.C.E. reajustó el monto de la prestación, con base en un IBL de \$4.970.853 y una tasa de reemplazo del 79%, reconociendo un retroactivo pensional por valor de \$12.289.928, dando por sentado que cuenta solo con 1.303 semanas en toda su vida laboral.

Asevero que el IBL de toda su vida laboral realmente asciende a la suma de \$5.355.175, suma sobre la que debe aplicarse el 90%, como tasa de reemplazo para establecer el verdadero monto de la pensión de vejez (doc.06, carp.01).

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado legalmente constituido, Colpensiones E.I.C.E. dio respuesta al libelo introductorio aceptando la fecha de nacimiento de la actora, la densidad de semanas cotizadas en el sector privado, y el tiempo de servicio laborado al sector público sin cotizaciones al ISS, las condiciones bajo las que reconoció y reliquidó la pensión de vejez de la demandante, y los términos en los que la actora petitionó el reajuste de la prestación.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones arguyendo que la prestación fue reajustada considerando el tiempo laborado al servicio del sector público y privado, pero bajo las previsiones de la Ley 100 de 1993, que establece un monto máximo del 80% del IBL, teniendo en cuenta que el régimen de transición solo ampara la edad, monto y tiempo de cotización establecido en el régimen anterior, más no así, lo concerniente al IBL.

Consecuentemente excepcionó la inexistencia de la obligación de pagar reliquidación de la pensión de vejez, improcedencia de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, imposibilidad de condena simultánea de pagar intereses moratorios e indexación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, compensación y pago (doc.11, carp.01).

1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante fallo proferido el 09 de marzo de 2023, declaró que la señora Yolanda Inés Correa Zapata le asiste el derecho al reajuste de la pensión de vejez, con fundamento en el Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición, aplicando el 90% como tasa de reemplazo, sobre el ingreso base de liquidación de toda la vida; condenó a Colpensiones E.I.C.E. a pagar a la demandante la suma de \$57.972.237 por concepto de reajuste pensional liquidado entre el 12 de octubre de 2018 y el 28 de febrero de 2023, y la suma de \$6.230.9921, por concepto de mesada pensional, a partir del 01 de marzo de 2023; ordenó el pago indexado del

reajuste pensional adeudado, y sobre el mismo autorizó descontar los aportes para el Sistema General de Salud; declaró probada la excepción de prescripción sobre el reajuste pensional causado con antelación al ordenado; y condenó en costas a Colpensiones E.I.C.E. en favor de la demandante (doc.17, carp.01).

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

La poderhabiente judicial de Colpensiones E.I.C.E. impetró el recurso de alzada en procura de que revoque íntegramente la sentencia dictada, deliberando que el IBL no hace parte de los aspectos incluidos en el régimen de transición, y por ello, la liquidación del mismo se rige por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, y que la sumatoria de tiempo públicos y privados para los beneficiarios de dicha prerrogativa solo es procedente para consolidar el derecho a la pensión de vejez, y no para el reajuste de la misma (minuto 00:51:50, doc.17, carp.01).

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos de conclusión, la apoderada de Colpensiones E.I.C.E. insistió en la solicitud de revocatoria de la sentencia de primera instancia, arguyendo que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con en el régimen de transición se rige en estricto rigor por el inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993 que, para quienes les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, corresponde al promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior (doc.03, carp.02).

Por su parte, la procuradora judicial de Yolanda Inés Correa Zapata instó la confirmación de la decisión de primer grado, relevando que su porhijada es beneficiaria del régimen de transición, y acredita más de 1.250 semanas, teniendo en cuenta el tiempo laborado al servicio del sector público, y las cotizaciones que se hicieron al ISS, sumatoria que ha sido admitida por la jurisprudencia no solo

para el reconocimiento de la prestación, sino también para la reliquidación de la misma (doc.04, carp.02).

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, y los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, respectivamente.

De igual forma procede la consulta en favor de Colpensiones E.I.C.E., en los aspectos que no fueron objeto de alzada, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante*”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA INSTANCIA

Los siguientes supuestos fácticos no son objeto de controversia:

- Que la señora Yolanda Inés Correa Zapata nació el 28 de octubre de 1946 (pág.16, doc.02, carp.01; págs.118-119, doc.11, carp.01), que laboró al servicio del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, de forma interrumpida, entre el 23 de febrero de 1971 y el 17 de diciembre de 1980, por un total de 819 días, de los cuales 253 registran cotizaciones simultaneas (págs.21-27, doc.02, carp.01), que laboró al servicio del Municipio de Medellín, entre el 22 de abril de 1985 y el 13 de abril de 1989, por un total de 1.439 días, sin cotizaciones simultáneas(págs.73-

78, 86-91, doc.06, carp.01), y que cotizó 1.033,43 semanas al ISS, entre el 01 de julio de 1969 y el 31 de agosto de 2001 (págs.33-38, doc.06, carp.01).

- Que la actora fue pensionada por el riesgo de la vejez, mediante la Resolución 2219 del 11 de marzo de 2003, bajo el amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición, con una mesada de \$1.644.096, liquidada sobre 1.024 cotizadas al ISS, un IBL de \$2.192.128 y una tasa de reemplazo del 75%, acto administrativo en el que se estableció que acreditaba 1.310 semanas cotizadas con el tiempo público no simultáneo (págs.17-18, doc.06, carp.01).

- Que el 12 de octubre de 2021 la pretensora solicitó el reajuste de la mesada pensional “... como consecuencia de incrementar la tasa de reemplazo al 90% tal y como lo establece el Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta para ello las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales y los servicios presados a entidades públicas” (págs.28-32, doc.06, carp.01).

- Y que a través de la Resolución SUB 169398 del 28 de junio de 2022, Colpensiones E.I.C.E. dispuso el reajuste de la pensión de vejez de la demandante, aplicando para el efecto la Ley 100 de 1993, y fijando la mesada en \$3.926.974 para el año 2018, liquidada sobre 1.303 semanas cotizadas y laboradas al servicio del sector público, un IBL de \$2.219.016 para el año 2001, y una tasa de reemplazo del 79% (págs.62-72, doc.06, carp.01).

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si bajo el amparo del régimen de transición y el Decreto 758 de 1990, a la demandante le asiste el derecho al reajuste de la pensión de vejez, teniendo en cuenta la sumatoria de los tiempos públicos laborados sin cotizaciones al ISS y/o a otra caja o fondo de pensiones, y los tiempos efectivamente cotizados al Sistema General de Pensiones?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, es procedente reajustar la pensión de vejez reconocida en favor de la demandante, con una tasa de reemplazo del 90%, teniendo en cuenta el tiempo laborado al servicio del sector público sin cotizaciones, bajo el amparo del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición, razón por la cual la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA, y MODIFICADA únicamente en el sentido de extender la condena en concreto por el concepto de retroactivo del reajuste pensional adeudado.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

La Corte Constitucional compendió la línea jurisprudencial construida de tiempo atrás y según la cual es procedente la acumulación de cotizaciones y tiempo de servicios en el sector público, con el fin de reconocer una pensión de vejez, en aplicación del Decreto 758 de 1990 para los beneficiarios del régimen de transición, en los términos que a continuación se exponen:

“9.1. El cómputo de las semanas cotizadas es un aspecto que quedó consagrado en la Ley 100 de 1993 precisamente para dar solución a la desarticulación entre los diferentes regímenes que durante un tiempo hizo imposible acumular tiempos de servicio con diferentes empleadores, reduciendo notablemente la posibilidad de los trabajadores para acceder a la pensión de vejez.

De conformidad con los precedentes jurisprudenciales reseñados en la parte considerativa de esta sentencia, para efecto del reconocimiento de esta prestación es posible acumular los tiempos de servicios cotizados a las cajas o fondos de previsión social, con las semanas de cotización efectuada al Instituto de Seguros Sociales, por cuanto la exclusividad en los aportes a esta entidad se trata de un evento no contemplado en el Acuerdo 049 de 1990.

9.2. Por otro lado, según se decantó en esta providencia, por ser la postura que mejor se ajusta a la Constitución y a los principios de favorabilidad y pro homine, y que maximiza la garantía del derecho fundamental a la seguridad social, tal acumulación es válida no solo para los casos en que fueron acreditadas 1000 semanas en cualquier

tiempo, sino también para los eventos en los que se demostró haber reunido un total de 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida.

9.3. Finalmente, también es posible acumular el tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las semanas aportadas al Instituto de Seguros Sociales. Lo anterior, toda vez que se trata de una circunstancia que puede limitar el goce efectivo del derecho a la seguridad social, y porque el hecho de no haberse realizado las respectivas cotizaciones o descuentos no es una conducta que deba soportar el trabajador, más aún cuando era la entidad pública la que asumía dicha carga prestacional” (Sentencia SU-769 de 2014).

En la misma dirección la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a su nueva integración, rectificó su postura respecto a la posibilidad de sumar tiempos públicos y privados, y en su lugar, propugnó la viabilidad de la sumatoria de tiempos públicos y privados en aplicación del régimen de transición:

“De todo lo anterior, se concluye:

(i) El sistema de seguridad social, inspirado en el principio de universalidad y el trabajo como referente de construcción de la pensión, reconoce validez a todos los tiempos laborados, sin distinciones fundadas en la clase de empleador (público o privado) a la que se prestaron los servicios, la entidad de previsión a la que se realizaron los aportes o si los tiempos efectivamente laborados no fueron cotizados.

(ii) En tal dirección, el literal f) del artículo 13 refiere que para el reconocimiento de las pensiones del sistema se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de semanas cotizadas o el lapso laborado.

(iii) Los beneficiarios del régimen de transición, son afiliados del sistema general de seguridad social y, por consiguiente, salvo en lo que respecta a la edad, tiempo y monto de la pensión, las directrices, principios y reglas de la Ley 100 de 1993 les aplica en su integridad, lo que incluye la posibilidad de sumar todas las semanas laboradas en el sector público, sin importar si fueron o no cotizadas al ISS, hoy Colpensiones.

(iv) Esta regla de cardinal importancia la resaltó el legislador en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al habilitar para los beneficiarios del régimen de transición, los tiempos públicos y privados, cotizados o no a entidades de previsión social o al ISS.

(v) Para darle viabilidad a esta posibilidad legal de integrar las semanas laboradas en el sector público sin cotización al ISS, la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios regulan extensamente todo un régimen financiación de las prestaciones a través de cuotas partes y títulos pensionales” (CSJ SL1984-2020, SL2557-2020, SL3538-2021, SL3484-2022).

Asimismo, la Sala Laboral de la citada Corporación, extendió la procedencia de la referida acumulación de tiempos públicos y privados, para efectos de la reliquidación pensional en los siguientes términos:

“En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad(...).

Conforme lo anterior, conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento.

De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez de la demandante” (CSJ SL 2557-2020, SL 3801-2021, SL3484-2022).

2.6.- CASO CONCRETO

En acatamiento del precedente jurisprudencial antes descrito, debe acogerse entonces la tesis de la pertinencia de la reliquidación de las pensiones de vejez reconocida bajo el amparo del régimen de transición, aplicando para ello, la sumatoria de tiempos públicos y privados, y siendo que en el *sub juice* no se discute que la señora Yolanda Inés Correa Zapata es beneficiaria del régimen de transición, que le son aplicables las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, y que acredita un total de 1.303 semanas, según lo asentado en la Resolución SUB

169398 del 28 de junio de 2022 (págs.62-72, doc.06, carp.01), debe aplicársele como tasa de reemplazo el 90%, conforme lo contemplado en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, tal y como lo estableció la *a quo*.

En lo que respecta al Ingreso Base de Liquidación se relievra que para los beneficiarios del régimen de transición que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, con el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior (inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993), y que para el 01 de abril de 1994 la señora Yolanda Inés Correa Zapata contaba con 47 años de edad, allende que nació el 28 de octubre de 1946 (pág.16, doc.02, carp.01; págs.118-119, doc.11, carp.01), esto es, le faltaba un poco menos de ocho (8) años para causar el derecho a la pensión de vejez.

Realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, la Sala encontró que el promedio de los salarios devengados por la actora durante toda la vida, actualizados con el IPC del año 2000, teniendo en cuenta que la prestación comenzó a pagarse el 28 de octubre de 2001, asciende a la suma de \$2.381.701, que con una tasa de reemplazo del 90%, arroja a una mesada a reconocer de \$2.143.531, para el 28 de octubre de 2001 ($\$2381.701 \times 90\% = \$2.143.561$), suma que resulta superior a la liquidada por la cognoscente de primer grado, quién arribó a un IBL de \$2.376.972 y una mesada de \$2.138.275 (doc.17, carp.01), diferencia que se origina porque al momento de registrar del Ingreso Base de Cotización para los años 1977 -1979 no se tuvieron en cuenta algunas cotizaciones simultaneas; para los años 1985 – 1989 no se tuvieron en cuenta las cifras decimales, y en diciembre del año 2000 se registró un IBC \$2.500.000 pero el reportado fue de \$250.000; pese a lo anterior, se advierte que éste aspecto no fue objeto de alzada por la pretensora, y está siendo revisado bajo el grado jurisdiccional de consulta exclusivamente en favor de Colpensiones E.I.C.E., razón por la cual se mantendrá la mesada liquidada por la *a quo*.

Ahora bien, se advierte que entre la fecha en que para el actor se hizo efectivo el derecho al disfrute de la pensión de vejez, esto es, el 28 de octubre de 2001, según Resolución 2219 del 11 de marzo de 2003 (págs.17-18, doc.06, carp.01), y hasta la fecha en que se solicitó el reajuste de la prestación, esto es, hasta el 12 de octubre de 2021 (págs.28-32, doc.06, carp.01), transcurrió con creces el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, y por ello, solo habrá de reconocerse el mayor valor causado sobre las mesadas causadas a partir del 12 de octubre de 2018, como acertadamente lo consideró la cognoscente de primera instancia, siendo que entre la fecha de reclamación del derecho, 12 de octubre de 2021 (págs.28-32, doc.06, carp.01), y la fecha de presentación de la demanda, 12 de enero de 2023 (pág.04, doc.02, carp.01), no transcurrió el término de prescripción antes descrito, esto es, el fenómeno extintivo se mantuvo interrumpido.

Así las cosas, Colpensiones E.I.C.E. deberá reconocer y pagar en favor del demandante la suma de \$59.097.250, por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 12 de octubre de 2018 y el 31 de marzo de 2023, debiéndose modificar en este aspecto la sentencia consultada, únicamente en el sentido de extender la condena en concreto, en los términos establecidos en el inciso 2º del artículo 283 del Código General del Proceso.

En igual sentido, cumple indicar que la mesada a reconocer a partir del 01 de abril de 2023 asciende a la suma de \$9.230.921, tal y como lo indicó la falladora de primer grado, y como se desprende de la liquidación que hace parte integral de la presente providencia.

Adicionalmente, se advierte que de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, razón por la cual se confirmará la autorización deferida a Colpensiones E.I.C.E. para descontar del reajuste pensional dispensado los aportes para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Finalmente, procede la indexación, la cual constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, toda vez que, en países inflacionarios como el nuestro, la moneda pierde su valor adquisitivo, por lo que se confirmará la condena impuesta a Colpensiones E.I.C.E en este sentido.

Consecuentemente, lo procedente es confirmar y modificar la sentencia de primera instancia en los aspectos y términos antes descritos. Costas en esta instancia a cargo Colpensiones E.I.C.E., por habersele resuelto el recurso de apelación de manera desfavorable. Se fijan como agencias en derecho en favor de la Yolanda Inés Correa Zapata, la suma de \$1.160.000 que corresponde a un (1) SMLMV.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **MODIFICA** el numeral tercero de la sentencia proferida el 09 de marzo de 2023 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Yolanda Inés Correa Zapata contra Colpensiones E.I.C.E., únicamente en el sentido de extender la condena al reajuste pensional causado entre el 12 de octubre de 2018 y el 31 de marzo de 2023, el cual asciende a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$59.097.250).


2.- Se **CONFIRMA** en todo lo demás la sentencia de fecha y origen conocidos.


3.- Costas en esta instancia a cargo de Colpensiones E.I.C.E. y en favor de Yolanda Inés Correa Zapata; se fijan agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.


4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO